



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: MARÍA TRINIDAD POSADA YEPES  
Demandado: CARMEN YULIANA RESTREPO ORREGO y LIBIA ISABEL ORREGO DE RESTREPO en calidad de sucesoras procesales del señor HUMBERTO DE JESÚS RESTREPO PALACIO y COLPENSIONES  
Radicado: 05001 31 05 019 2015 00711 01  
Sentencia: S-011

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver la nulidad constitucional por violación al debido proceso y el recurso de apelación propuestos por el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia absolutoria de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de diciembre de 2021

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

## **PRETENSIONES:**

MARÍA TRINIDAD POSADA YEPES demandó inicialmente al señor HUMBERTO DE JESÚS RESTREPO PALACIO (fallecido el 5 de agosto de 2015, por ello, hoy representado por las señoras CARMEN YULIANA RESTREPO ORREGO y LIBIA ISABEL ORREGO de RESTREPO en calidad de sucesoras procesales) y a COLPENSIONES, con el fin de que se DECLARE que entre ella y el Sr. RESTREPO PALACIO (Q.E.P.D.) en calidad de propietario del Establecimiento de Comercio DEPÓSITO DE MATERIALES SANTA ROSA, existió un contrato verbal de trabajo a término indefinido, y de ser así, determinar los extremos temporales en que se dio tal relación de trabajo. Igualmente se CONDENARÁ a la parte demandada al pago de prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios, así como las vacaciones; reajuste de salarios; pago de horas extras, dominicales y festivas, intereses y la indexación de las condenas hasta que se haga efectivo el pago. Así mismo se CONDENARÁ al pago de la indemnización moratoria de que tratan los artículos 65 del CST y 99-3 de la Ley 50 de 1990, además de la indemnización por despido injusto, los perjuicios materiales y morales, el pago de aportes a la seguridad social en salud y pensiones, y costas del proceso.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que celebró un contrato de trabajo verbal a término indefinido con el señor HUMBERTO DE JESÚS RESTREPO PALACIO, para laborar como administradora – vendedora en el Establecimiento de Comercio DEPÓSITO DE MATERIALES SANTA ROSA. Que tal contrato tuvo como extremo inicial el 23 de agosto de 2006 y como extremo final el 25 de abril del año 2015, fecha en la cual le dieron por terminado el contrato sin que mediara justa causa para ello. Que en el desarrollo de dicho contrato debía cumplir horario y órdenes. Que el empleador nunca le pagó prestaciones sociales ni realizó aportes a la seguridad social. Que por la labor prestada le pagaron la suma de \$160.000 mensuales durante los 9 años que duró la relación laboral.

## **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, el demandado, quien posteriormente es sucedido procesalmente por las señoras CARMEN YULIANA RESTREPO ORREGO y LIBIA ISABEL ORREGO DE RESTREPO, indica que no le consta ninguno de los hechos por cuanto los mismos son ajenos a su conocimiento y frente a las cuales no tuvo ninguna participación; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y en su defensa propuso las excepciones de mérito que denominó temeridad y mala fe, prescripción, falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva y cobro de lo no debido.

COLPENSIONES, de igual forma, dio respuesta a la demanda indicando igualmente que no le constan los hechos relatados por ser circunstancias que se dieron entre la demandante y el sujeto pasivo principal, encontrándose la entidad vinculada al proceso para que en caso de que las pretensiones incoadas resulten reconocidas, reciba los aportes a la seguridad social, por lo que se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso y al pago que eventualmente tenga que hacer el empleador con respecto a las cotizaciones a que haya lugar.

## **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, dispuso lo siguiente:

*“PRIMERO: ABSOLVER a LIBIA ISABEL ORREGO DE RESTREPO Y CARMEN YULIANA RESTREPO ORREGO como sucesoras procesales de Humberto de Jesús Restrepo Palacio, y representantes de su masa herencial, de las pretensiones incoadas en su contra por la señora María Trinidad Posada Yepes identificada con 43.524.858.*

*SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES de las pretensiones incoadas en su contra por la señora María Trinidad Posada Yepes identificada con 43.524.858.*

*TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante por resultar vencida en el proceso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$300.000. (...)"*

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpone y sustenta el recurso de apelación, solicitando se revoque la sentencia en su totalidad y en su lugar se declaren no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y se concedan todas las súplicas de la demanda.

Indica que el fallo de primera instancia es abiertamente violatorio de los derechos fundamentales de la demandante, tales como el mínimo vital, la igualdad y el debido proceso. Que, en subsidio de no revocarse el fallo apelado, se declare la nulidad constitucional por violación al derecho de igualdad de los sujetos procesales al interior del proceso.

Como sustento de su recurso indicó que el A-quo desconoció de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución Política al declarar confesa a la demandante, aun cuando se había allegado información de la imposibilidad de esta de asistir a la audiencia de conciliación por encontrarse fuera de país. Que además desconoció la relación laboral que sostuvo la demandante con el demandado, aún después de haberse demostrado tal relación a través de las pruebas arrimadas al proceso. Que el juez de primera instancia no le dio aplicación a la prevalencia al principio del derecho sustancial sobre el procedimental y del principio de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, a pesar de encontrarse probada en el proceso la relación laboral entre las partes, y ahora con las sucesoras procesales. Que el fallo desconoció que existió un contrato realidad, lo que conlleva a exigirle a los contratantes la obligación de realizar el pago de los aportes a la seguridad social a favor de la

trabajadora de manera que las semanas de cotización le sumen en la historia laboral y eventualmente ser beneficiaria de la pensión de vejez. Que el juez de primera instancia desconoció el artículo 42 del CGP, aplicable de manera analógica al proceso laboral, que le ordena al juez que, en caso duda sobre los hechos de la demanda, es su obligación decretar las pruebas de oficio que considere necesarias, que además el Juez falló sin tener en cuenta que no se decretó la inspección judicial que se había solicitado desde la presentación de la demanda.

Por todo ello, solicita sea revocada la sentencia de primera instancia y se emita un nuevo fallo que tenga en cuenta la demanda, la contestación, las pruebas evacuadas dentro del proceso y como consecuencia de ello se concedan todas y cada una de las pretensiones incoadas, o en subsidio se declare la nulidad constitucional en la forma ya indicada.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión en los mismos términos señalados al momento de interponer el recurso de apelación, básicamente, reiterando lo relativo a la nulidad constitucional descritos en el acápite anterior.

### **CONSIDERACIONES:**

Atendiendo a que la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de fondo adoptada por el Juez de primera instancia, y en subsidio solicitó la declaratoria de nulidad constitucional en la forma redactada en el acápite de RECURSOS, por una razón de metodología se pasará primero a resolver la solicitud de nulidad constitucional.

Frente a las eventuales nulidades que, según se alega, ocurrieron dentro del proceso y de las que se indica de manera general que fueron violatorias del marco del Estado Social de Derecho, donde también cita el desconocimiento de los principios de favorabilidad, neutralidad y del contrato-realidad, entre otros, bastaría con indicar que de acuerdo al régimen de nulidades consagradas en el Código General del Proceso, las mismas “... **podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia, o con posterioridad a esta, si ocurrieron en ella**” (Artículo 134 del CGP), En el caso bajo examen, se evidencia que los hechos que motivaron la solicitud de la nulidad ocurrieron antes del fallo de primer grado, lo que se traduce en que fue propuesta de manera extemporánea si se tiene en cuenta que ya se habían superado los estadios procesales para su interposición, pero no, como aconteció, después de emitida la sentencia de fondo que puso fin a la primera instancia.

Con todo, debe decirse que conforme al relato realizado por el apoderado de la parte demandante, ninguna de tales supuestas anormalidades procesales encuentra venero en las causales previstas en el artículo 133 del CGP, ni tocan con la violación constitucional del derecho de defensa como lo enfatiza el recurrente, sino que alude solo a aspectos de aplicación normativa, que lejos están de constituir una arbitrariedad de la a quo, máxime que el apoderado que se sintió agraviado con las decisiones pudo interponer - y en derecho lo hizo - los recursos legales procedentes. Así, (i) la asignación del mérito a la confesión ficta o presunta que le fue declarada a la demandante por su inasistencia a la audiencia respectiva en aplicación del artículo 77 del CPTSS (modificado por el art. 39 de la Ley 712 de 2001); (ii) ora en no decretar la inspección judicial como prueba porque la funcionaria consideró que con el decreto de las demás pruebas era suficiente; (iii) o bien en no desplegar las facultades oficiosas para decretar nuevas pruebas, fundamentos que, como se indicó, son solo manifestaciones generales frente al recurso y, si se detalla cada una de estas, no se observan razones para decretar la nulidad de la

sentencia en tanto tocan básicamente con decisiones jurídicas – se esté o no de acuerdo con ellas – que atañen al contenido material mismo de la decisión.

Pero, además, no sobra precisar que el presente asunto fue remitido a este Despacho en tres oportunidades anteriores, la primera de ellas a fin de conocer el recurso de apelación frente al auto que negó las medidas cautelares solicitadas, providencia proferida por el A-Quo el 8 de septiembre de 2016. La decisión de primera instancia fue confirmada en todas sus partes por esta Sala en audiencia del 01 de agosto de 2017.

La segunda vez, a efectos de resolver el recurso de apelación propuesto por la parte actora en contra de la providencia del 01 de marzo de 2017, en la que la Juez de instancia resolvió no acceder a la reforma a la demanda; decisión que también fue confirmada por esta Sala en audiencia del 24 de octubre de 2017.

La tercera oportunidad, a efectos de resolver recurso de queja interpuesto por el apoderado de la parte actora, esto por cuanto el Juzgado de primer grado, en audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio llevada a cabo el 16 de noviembre de 2018, ante la inasistencia de la demandante a dicha audiencia sin la debida justificación, dispuso aplicar las consecuencias establecidas en el artículo 77 del CPTSS, en el sentido de presumir como ciertos algunos de los hechos de la contestación de la demanda, los cuales relacionó expresamente. Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación por considerar que con tal decisión se vulneraban sus derechos fundamentales; como la Juez decidió no conceder el recurso de apelación por no tratarse de un auto apelable en los términos del artículo 65 del CPTSS, el apoderado interpuso recurso de reposición contra esta última decisión y en subsidio solicitó la expedición de copias para presentar recurso de queja ante el Superior, ante lo cual

nuevamente se mantuvo lo decidido y se concedió el recurso de queja. Esta situación fue igualmente resuelta por esta Sala y a través de providencia del 8 de febrero de 2019, declaró bien denegado el recurso de apelación interpuesto.

Continúa la Sala con la resolución del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante. Se tiene entonces que la señora MARÍA TRINIDAD POSADA YEPES alega que laboró al servicio del señor HUMBERTO DE JESÚS POSADA RESTREPO, propietario del establecimiento de comercio denominado DEPOSITO DE MATERIALES SANTA ROSA, bajo un contrato de trabajo verbal a término indefinido, para laborar como administradora – vendedora en el Establecimiento ya indicado, cuya actividad económica es el comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio. Que tal actividad, sostiene, la desarrolló entre el 23 de agosto del año 2006 y el 25 de abril del año 2015, la cual habría desarrollado en forma continua e ininterrumpida y bajo el cumplimiento de órdenes y horarios. Que inclusive laboraba horas extras, dominicales y festivas. Que como remuneración de los servicios prestados le pagaban la suma de \$160.000 mensuales durante los 9 años en que habría durado tal relación laboral y que fue despedida sin que mediara causa justa para ello.

Es sabido que de conformidad con el artículo 23 del CST, para que exista contrato de trabajo se requiere que concurren tres elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador, esto es, realizada por sí mismo, b) la continuada dependencia o subordinación del trabajador con respecto al empleador, y c) un salario como retribución del servicio.

El segundo de los elementos enunciados, esto es, la continuada dependencia o subordinación, es el que determina la diferencia entre el contrato de trabajo y otras formas de contratación jurídica, en las cuales, por darse una relación igualitaria o no subordinada entre los



sujetos de la relación contractual, no se causan, como en aquél, prestaciones sociales.

La norma últimamente citada describe tal dependencia o subordinación jurídica como la facultad que tiene el empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, y la correlativa obligación de este de acatar dichas órdenes o reglamentos. Como facultad que es, no es necesario que el empleador de hecho la ejerza en todo momento, pues basta la potestad de poder usarla en cualquier tiempo.

Planteado así el pleito, incumbía al demandante la carga de la prueba de sus aseveraciones de manera que pueda el juez arribar a la conclusión certera acerca de la existencia del contrato de trabajo, para lo cual sería suficiente la demostración, al menos, de la relación laboral que se caracteriza por la prestación personal de un servicio, para que en virtud de lo normado en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presuma la existencia del nexo laboral subordinado, trasladándose la carga de desvirtuar la presunción a la parte opositora.

Carga probatoria que no se agota en la demostración de la relación laboral – o prestación personal del servicio – sino que, además, se requiere la acreditación de otros elementos no menos determinantes para el buen suceso de lo pretendido, verbi gracia, los extremos temporales en que tal relación se presentó, o bien la forma en que terminó el vínculo laboral, dado que sin ellos no es viable deducir, en concreto, derechos laborales como los que aquí se reclaman.

En el presente caso, el juez *a quo* concluyó que la demandante eventualmente le prestó un servicio al demandado, sin que se logre establecer realmente la periodicidad del mismo; ahora, del interrogatorio absuelto por la señora LIBIA ISABEL ORREGO DE

RESTREPO, así como de la declaración del señor VÍCTOR DE JESÚS CASTAÑO SOTO, es dable colegir ciertamente que la demandante prestó algunos servicios al demandado; sin embargo, con ello no es posible concretar que efectivamente existiera una relación de trabajo continuada, estable y con vocación de permanencia, de tal manera que se pueda imponer el pago de prestaciones sociales u otras acreencias según fueron solicitadas con la demanda. Esto por cuanto hacen falta otros elementos tales como los períodos en que se desarrolló la labor, la continuidad con que se prestaron dichos servicios, los extremos temporales de los mismos, las facultades de ordenación del trabajo por parte del propietario del establecimiento frente a la demandante y la obligación de esta en acatar instrucciones, el cumplimiento de un horario establecido, etc. Y a la misma conclusión habrá de llegar la Sala en esta oportunidad, ya que, con el testimonio del señor VÍCTOR DE JESÚS CASTAÑO SOTO y los interrogatorios de parte practicados a las señoras CARMEN YULIANA RESTREPO ORREGO y LIBIA ISABEL ORREGO DE RESTREPO, en calidad de sucesoras procesales del señor HUMBERTO DE JESÚS RESTREPO PALACIO, no es posible concluir que haya existido un vínculo entre las partes de carácter laboral, continuado y permanente, lo que dará lugar a confirmar la sentencia de primera instancia.

Del conjunto probatorio recolectado, conformado básicamente por la prueba oral, pues la escasa documental que la accionante aporta con la demanda se reduce a pruebas pre-constituidas por ella misma, además de una citación a la Oficina del Trabajo, (Págs. 26 a 29 del archivo 01) se tiene el interrogatorio practicado más dos declaraciones de cada parte, de las cuales puede concluirse que la señora MARÍA TRINIDAD POSADA YEPES prestó algunos servicios personales para el señor HUMBERTO DE JESÚS RESTREPO PALACIO, pero se trató de un servicio esporádico, ocasional, pasajero, temporal o momentáneo, sin que implique de ninguna manera una relación laboral regida por un auténtico contrato de trabajo bajo una continuada y permanente dependencia.

Incluso, aunque se entienda que dichos servicios prestados han dado lugar a que se presuma la existencia de un nexo laboral entre las partes, de esas mismas declaraciones se puede establecer que tal presunción ha quedado desvirtuada. En este sentido, se puede consultar el criterio que ha mantenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 13 de abril de 2010, rad. 34223, reiterada en providencia del SL 3009 del 15 de febrero de 2017, rad. 47044, en las que sostuvo:

*“Para la Corte es claro que si el Tribunal tuvo por probado que el actor le trabajó a la demandada, no tenía por qué verificar si esa actividad laboral se hizo bajo subordinación laboral, pues ese hecho debió considerarlo debidamente acreditado por razón de la presunción consagrada en la norma legal que infringió directamente. Toda vez que esa presunción es de naturaleza legal y, por lo tanto, susceptible de ser desvirtuada, ha debido entonces el fallador indagar si la presunción se desvirtuó por la parte demandada, acreditando que los servicios se prestaron de manera independiente, esto es, su labor de análisis de las pruebas se debió orientar a encontrar la autonomía en la prestación de los servicios, mas no la subordinación, que, en principio, estaba acreditada por ministerio de la ley.”*

Y se entiende que en este caso esa presunción ha quedado desvirtuada porque la declaración del testigo VÍCTOR DE JESÚS CASTAÑO SOTO, da cuenta de que la actividad desempeñada por la demandante no era continua, subordinada o permanente. Tampoco se pudo concluir la obligatoriedad de cumplir un horario, ya que su actividad dependía de la necesidad que tenía el demandado de realizar gestiones personales, lo que no necesariamente ocurría todos los días ni a las mismas horas, pues su labor podía ser desarrollada en horas de la mañana o en la tarde, además de que, si no estaba disponible, no se generaba ninguna consecuencia sancionatoria en su contra.

En concreto, no sobra mencionar que desde el propio interrogatorio de parte practicado a la señora LIBIA ISABEL ORREGO DE RESTREPO,

explicó que conoció a la demandante en razón de vecindad y que ella le hacía mandaditos al demandado, pero sin brindar otros detalles acerca de su actividad, como son, horario, periodicidad, pago o extremos temporales en los que desarrolló dicha labor.

Aunado a lo anterior, el único testigo traído al proceso, señor VÍCTOR DE JESÚS CASTAÑO SOTO, tampoco aporta mucho al proceso en materia probatoria en atención a que no tiene conocimiento de los extremos temporales en que la demandante prestó sus servicios al demandado, tampoco si por ello recibía alguna remuneración, ni el horario o la periodicidad con la que la demandante prestaba dichos servicios, pues simplemente se limitó a indicar que la demandante no laboró al servicio del demandado, que este no le daba órdenes, pero que ella si cuidaba la ferretería de propiedad del demandado cuando él tenía que salir a cumplir alguna (s) diligencia y que esto podía darse tres o cuatro veces por semana.

En suma, examinado el acervo probatorio y de conformidad con las peculiaridades de la relación en cuestión, no hay elementos de juicio para acceder a las pretensiones de la demandante, por lo que la decisión de primera instancia será confirmada.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$580.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de diciembre de 2021.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$580.000

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5bffb89c7cbaa9e07071f4a06e0f3e62eed3dc29f860cc099dd0a067e318813**

Documento generado en 02/02/2023 02:58:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>